

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 77**  
**O R D I N A R I A**  
**MARTES 6 DE AGOSTO DE 2013**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del martes seis de agosto de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán. No asistió el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández previo aviso a la Presidencia.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto de acta de la sesión pública número setenta y seis, ordinaria, celebrada el lunes cinco de agosto de dos mil trece.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el seis de agosto de dos mil trece:

**II. 1. 12/2001**

Denuncia de incumplimiento por aplicación de normas o actos declarados inválidos en la sentencia de la controversia constitucional 12/2001, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: “PRIMERO. Es procedente y fundado el incidente de incumplimiento de sentencia en términos del considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. No es procedente aplicar a los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la sanción a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 constitucional por las razones contenidas en el considerando octavo de esta sentencia”.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando octavo relativo a la existencia del incumplimiento a la sentencia respectiva.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que se referiría únicamente al primer punto relativo a la existencia del incumplimiento y sólo en caso de que exista mayoría en este sentido, se posicionará respecto de su excusabilidad y señaló que al no haber formado parte de este Alto Tribunal al momento de dictarse la resolución que se alega incumplida,

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

se impuso de su contenido de la misma forma que lo haría cualquier otro juzgador.

Sostuvo que aun cuando se trata de una sentencia atípica, es suficientemente clara para determinar su incumplimiento pues destacó que en el caso, el efecto del fallo no consistió en dar libertad al Municipio de Tulancingo de Bravo para que en cada juicio optara por un tipo de representación, pues sería tanto como dejarle un ejercicio de opción múltiple, sino que quedó en libertad de regular la materia de representación como lo hizo y consideró que el efecto de la sentencia consiste en que la regla de representación contenida en el artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tulancingo, tiene preeminencia sobre el artículo 52, fracción XXXV, de la Ley Orgánica Municipal, por lo que estimó irrelevante que el hecho de que el Presidente Municipal en el juicio que da origen a este incumplimiento fundara su representación en el artículo 52 de dicha Ley Orgánica, pues debe determinarse si es o no el representante legal del Municipio, conforme a lo sostenido por este Alto Tribunal y por el artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Precisó que conforme a lo previsto en el artículo 127 de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales así como Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, cuando la parte demandada esté mal representada se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, por lo que al

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

contestarse la demanda por el Presidente Municipal asumiéndose como representante legal del Municipio con una normativa firme, la representación no desaparece por la invocación incorrecta de un precepto.

En ese orden de ideas, consideró que al haberse desconocido la representación legal que ostenta el Presidente Municipal en términos de lo previsto en el artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno que por determinación de este Tribunal Pleno tiene preeminencia respecto del diverso 52 de la Ley Orgánica Municipal, se actualiza un incumplimiento a la sentencia de esta Suprema Corte. Indicó que para los efectos del incumplimiento de controversias constitucionales no existe un principio de definitividad que tenga que agotarse en términos del artículo 47 de la Ley Reglamentaria, aunado a que era obligación de los juzgadores aplicar el orden jurídico vigente en la resolución que daba preeminencia al referido artículo 29. Por ende, se manifestó por el incumplimiento pero a partir de argumentos distintos a los vertidos en el proyecto.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena estimó que efectivamente se está ante un incumplimiento de la sentencia de mérito, toda vez que el legado de la controversia constitucional 12/2001 consiste en el reconocimiento del Municipio como un orden jurídico, de tal manera que si el precepto fue expulsado del orden jurídico, para reintegrarlo debía actualizarse algún mecanismo de

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

producción de normas por parte del Municipio, es decir, de un acto que reincorporara la norma expulsada.

Sostuvo que el hecho de presentar la demanda con fundamento en el artículo 52 de la referida Ley Orgánica, no es una fuente de norma para reincorporarlo al orden jurídico y, por ende, se manifestó en el sentido de que en el caso concreto se actualiza el incumplimiento de la sentencia.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con los argumentos que se sostienen respecto del incumplimiento de la sentencia en función de la preeminencia en la aplicación del artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal; sin embargo, indicó que el referido precepto no estaba vigente, conforme a lo resuelto en la citada controversia constitucional, de tal manera que no es posible sostener que fuese preeminente en relación con un Bando de Policía y Buen Gobierno derogado.

En ese orden de ideas, consideró que sólo podía aplicarse un reglamento emitido con posterioridad y no anterior y, por ende, no se está ante un incumplimiento porque el precepto no se expulsó del orden jurídico, sino que el efecto de la sentencia consistió en que el Congreso Local legislara adecuadamente y clasificara si las normas establecidas en la Ley Orgánica Municipal que se analizaron en la citada controversia constitucional pertenecían a las bases generales para establecer la homogeneidad respecto de la regulación de la Hacienda Municipal, aunado a que

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

debía contener otra norma diversa para los Municipios que no hubieren emitido el reglamento correspondiente.

Mencionó los antecedentes del juicio laboral, de donde desprendió que no se está ante un incumplimiento del tribunal burocrático pues éste sólo adoptó la aplicación del precepto vigente en el momento.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que el Congreso Local no tiene atribuciones para derogar reglamentos municipales, por lo que no era necesario que se declarara inconstitucional el artículo tercero transitorio.

Se refirió a la impugnación del Municipio en el sentido de que hubo una usurpación del Congreso, a partir de la cual este Alto Tribunal emitió la resolución en la que los Municipios puedan considerar que tiene preeminencia su propio reglamento y, al no haberlo modificado, debería estarse de conformidad con la referida sentencia y la normativa sobre la representación sin prejuzgar sobre la constitucionalidad del artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tulancingo de Bravo.

En ese orden de ideas, sostuvo que el Congreso Local carece de atribuciones para derogar los reglamentos municipales aunado a que posteriormente este Alto Tribunal determinó que carecía de facultades para regular dichas materias y estableció la posibilidad de que el Municipio estableciera el momento en que le era preeminente la Ley Orgánica o en cuál podría optar por su propia

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

reglamentación interna, por lo que el precepto no se encontraba derogado.

La señora Ministra Luna Ramos dio lectura a los efectos de la sentencia, de donde se desprende que no se apliquen las leyes anteriores, sino aquélla que se genere entre la nueva ley y el reglamento, siendo que su constitucionalidad se juzgaría en el momento oportuno.

Consideró que el reglamento de mérito es heterónomo y se encuentra supeditado jerárquicamente a la Ley Orgánica Municipal, por lo que puede ser válidamente derogado por el Congreso Municipal.

El señor Ministro Pérez Dayán sostuvo que no existió un incumplimiento a la sentencia.

Precisó que el hecho de que una sentencia sea compleja, no implica que sea poco clara, e indicó que la resolución de mérito aun cuando es compleja es clara y en ésta no se expulsó el precepto respectivo del orden jurídico.

Manifestó que la dinámica procesal del asunto llevó a aplicar la disposición legal por invocación propia de una de las partes que fue también partícipe de la controversia constitucional, aunado a que no invocó otra de carácter reglamentario, de tal manera que si el tribunal de trabajo hubiere pretendido pasar por encima de la invocación de la representación legal con la que se ostentó el demandado para encontrar aquella que realmente le corresponde, en la materia laboral se perjudicaría el principio de la suplencia.

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

Asimismo, expresó interrogantes en relación con que un concepto de violación enderezado en contra de una sentencia que le reconoce personalidad al Municipio en su calidad de demandado pudiera tener un sustento constitucional y legal para subsistir, por lo que en el caso, el tribunal burocrático actuó conforme a derecho.

Compartió los argumentos del señor Ministro Franco González Salas en el sentido de que este tipo de situaciones puede ser controvertido a través de otros medios procesales y cuestionó que la nulidad declarada no fue de invalidación de la norma sino sólo de su matización, pues el precepto legal no fue expulsado del orden jurídico, sino matizado.

Por ello, consideró que no se está ante un desconocimiento del contenido de la sentencia de la controversia constitucional 12/2001.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que no se está ante una sentencia claramente de nulidad, pues en sus puntos resolutivos se distinguió entre el reconocimiento de validez, la declaración de invalidez relativa y la declaración de invalidez de determinados preceptos respecto de los que se determinó expulsarlos del orden jurídico.

Señaló que en el caso, el Municipio de Tulancingo de Bravo promovió la controversia constitucional en contra del Congreso y del Gobernador del Estado de Hidalgo y los efectos de la sentencia consistieron en precisar que determinados artículos son imperativos, inclusive el aplicado



*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

y, por ello, el Municipio puede dictar sus propios reglamentos pues no se trata de un problema de jerarquía sino de diferencia competencial.

Por ello, sostuvo que el efecto de invalidez relativa no implica un efecto de anulación, sino que en ese caso, este Alto Tribunal proporcionó determinados matices para ciertos preceptos.

Consideró que en el caso sí se está ante una situación de aplicación; sin embargo, dicha aplicación no implica un incumplimiento pues el efecto no era anulatorio de expulsión, sino para considerar que no era imperativo y que el propio Municipio podía dictar sus propios reglamentos, es decir, que se le dio una matización específica.

Por ende, sí se está ante la aplicación del precepto pues, de lo contrario, se trataría de una cuestión metafísica.

Agregó que en el caso no se actualiza un incumplimiento, pues el efecto de la sentencia no estaba direccionado a la totalidad de los órganos del orden jurídico del Estado de Hidalgo, sino sólo para que el Municipio dictara sus propios reglamentos.

Por último, sostuvo que no se pronunciaría respecto de la excusabilidad del incumplimiento.

En ese tenor, al haberse dictado la sentencia en el sentido de que el Municipio actor se considerara no obligado por el precepto y emitiera su propio reglamento de acuerdo

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

con sus efectos, estimó que en los propios puntos resolutivos de la controversia constitucional 12/2001 se distingue claramente entre los preceptos que se deben aplicar, los que se deben expulsar y los que se matizaron.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que el texto de la referida sentencia es claro e indicó que en el caso, el Municipio actor acude como patrón en un juicio laboral, por lo que no aplicó en su condición de autoridad el precepto, sino que lo hizo en un juicio laboral.

Se refirió a los antecedentes del asunto e indicó que se está ante una cuestión de personalidad por una representación en un juicio laboral, por lo que no es posible sostener que a esa autoridad se le impute el incumplimiento de la resolución de una controversia constitucional, sino que en el caso, la parte afectada debió hacer valer los medios de defensa idóneos para que no se tuviera contestada la demanda en sentido afirmativo, por lo que no se actualiza incumplimiento alguno.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que se está ante el incumplimiento de una sentencia por la aplicación de normas declaradas inválidas, pues en el caso, el tribunal burocrático aplicó el precepto de manera imperativa, siendo que en la propia sentencia de la controversia constitucional se determinó que no debiera ser así.

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

El señor Ministro Aguilar Morales recordó que no se está juzgando la actuación del Municipio ni de la legislatura local, sino la del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que aplicó el precepto declarado inválido por este Alto Tribunal y, con base en éste, tomó la determinación procesal correspondiente, por lo que se está ante un incumplimiento o trasgresión a la resolución emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó por el incumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional, toda vez que sus efectos implicaban que el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal no era imperativo para el Municipio promovente, por lo que aun cuando no se expulsó del orden jurídico el auto dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para no reconocer la personalidad del Presidente Municipal se funda en dicho precepto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea planteó el supuesto de que en una sentencia de este Alto Tribunal se expulse un precepto del orden jurídico y sea aplicado en determinado juicio, de donde surgiría la interrogante consistente en si en esos casos deben agotarse otros medios de legalidad, o si puede controvertirse directamente a través del que se presenta en este momento, lo que consideró importante para la resolución de asuntos posteriores.

La señora Ministra Luna Ramos estimó que no era imperativa la aplicación del precepto por el tribunal

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

burocrático toda vez que conforme a los efectos establecidos en la sentencia, el Municipio actor se encontraba en plena libertad de decidir sobre su aplicación.

Por ello, consideró que el propio Presidente Municipal en uso de su libertad, optó por la aplicación del precepto para acreditar su personalidad.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó a favor del sentido del proyecto pero en contra de sus consideraciones.

Recordó que al resolverse la referida controversia constitucional se manifestó en contra incluso en el sentido de que hubiera nulidades relativas, pues llevarían a situaciones que generarían inseguridad jurídica.

Por ende, sostuvo que en el caso, se está ante una opción legislativa, por lo que se actualizó un incumplimiento con independencia de si éste es o no excusable.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas agradeció los argumentos vertidos por los señores Ministros; sin embargo, precisó que algunos temas no quedan claros pues se basan en la postura de que la invalidez relativa se dirige al objeto en cuanto a la libertad del Municipio de expedir sus propias normas, en tanto que de otras se desprende que no todos los sujetos de la entidad se encontraban obligados, por lo que propuso aclarar esta situación en la votación respectiva para hacerse cargo del engrose en los términos aprobados en la sesión.

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consultó si se reformularían las consideraciones y se presentaría una propuesta modificada, ante lo cual la señora Ministra ponente precisó que presentaría una propuesta modificada en relación con el incumplimiento.

El señor Ministro Pardo Rebolledo sostuvo que en caso de presentarse una nueva propuesta, no estaría en condiciones de votarla en este momento, pues requeriría de un análisis, ante lo cual, la referida señora Ministra ponente indicó que se haría cargo de las observaciones del proyecto a partir de los argumentos de los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea.

El señor Ministro Cossío Díaz consideró complicado ajustar la propuesta, por lo que sugirió únicamente tomar votación a favor o en contra del proyecto precisando las razones de cada una de las votaciones y, en caso de diferencias sustantivas, podría reservarse la aclaración para un voto particular o concurrente, lo que fue aceptado por el señor Ministro Presidente Silva Meza.

Sometida a votación la propuesta del considerando octavo del proyecto, se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de consideraciones; Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas y Pérez Dayán votaron en contra.

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

El señor Ministro Presidente Silva Meza dejó a salvo el derecho de los señores Ministros para formular sendos votos particulares y concurrentes.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Tribunal Pleno el considerando noveno en cuanto se propone declarar excusable el incumplimiento por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y conceder a dicho órgano jurisdiccional un plazo prudente para que dé inmediato cumplimiento tanto a la ejecutoria de la controversia 12/2001 como a los efectos de su cumplimentación.

El señor Ministro Franco González Salas sostuvo que aquellos señores Ministros que se manifestaron en contra del considerando anterior en el sentido de que no existió incumplimiento, no podrían manifestarse respecto de su excusabilidad o inexcusabilidad, ante lo cual, el señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que no podrían haber intermedios para los que se manifestaron en esos términos.

El señor Ministro Aguilar Morales se pronunció en contra de este argumento, pues en el caso concreto la votación sería únicamente en relación con seis señores Ministros, por lo que sostuvo que una vez que este Tribunal Pleno decidió una consecuencia jurídica, todos los señores Ministros se encuentran obligados para pronunciarse respecto del siguiente tema.

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó que los referidos señores Ministros no quedarían excluidos de la discusión ni tampoco de la votación.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró que se estaría ante una polarización pues se debería ser lo suficientemente objetivo como para determinar la excusabilidad o no del incumplimiento, con independencia de la votación que se hubiera dado en el considerando anterior.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que la minoría se encuentra obligada a participar en la votación, por lo que reiteró su voto en el sentido de que la relatividad de la sentencia tenía una dirección específica respecto del Municipio de Tulancingo de Bravo, por lo que si la mayoría se manifestó en el sentido de que existió un incumplimiento, éste debía considerarse excusable, toda vez que el Municipio no se encontraba obligado a aplicar una norma relativizada por determinación de la propia sentencia.

En ese sentido, indicó que la postura que asumía era la de la lógica del proyecto y no la propia.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó en el mismo sentido y precisó que sería ilógico que aquellos señores Ministros que se posicionaron en el sentido de que no se actualizó el incumplimiento, sostuvieran que este es inexcusable.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que conforme a la lógica de su votación en el considerando

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

anterior, no se puede sancionar el incumplimiento de la sentencia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó a favor de la propuesta del proyecto; sin embargo, no compartió los argumentos de algunos señores Ministros en el sentido de que la excusabilidad deriva de la ignorancia, el desconocimiento o la minusvalía jurídica.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se pronunció por la excusabilidad pues se desprende que el Presidente Municipal al promover la demanda fundó su personalidad en el artículo 52, fracción XXXV, de la Ley Orgánica Municipal, no obstante que se está ante el incumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó que la excusabilidad del incumplimiento deriva de la promoción del Presidente Municipal; sin embargo, externó su preocupación en relación con que la minoría no se pronuncie respecto de la excusabilidad o inexcusabilidad del incumplimiento.

El señor Ministro Pérez Dayán precisó que si la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que incorporaría las razones que llevaron a sostener la inobservancia del precepto, se pronunciaría a favor de la propuesta modificada del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que los juzgadores tenían la obligación de conocer la sentencia de este Alto Tribunal, toda vez que fue publicada en el Diario



*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la entidad; sin embargo, consideró que se está ante una conducta excusable, pero por circunstancias diversas a las sostenidas en el proyecto a partir de los argumentos vertidos por los señores Ministros.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que modificaría la propuesta en los términos aprobados por el Tribunal Pleno.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando noveno del proyecto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, obligado por la mayoría y con reservas; Luna Ramos, obligada por la mayoría y con reservas; Franco González Salas, obligado por la mayoría y con reservas; Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó que una vez obtenida la votación de las consideraciones del asunto, se procedería a la votación de los puntos decisorios, la cual será en el sentido del fondo del asunto.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que en relación con el auto de tres de octubre de dos mil siete este Alto Tribunal reconoció legitimación al Síndico para denunciar la aplicación de los preceptos legales declarados de invalidez relativa en la controversia constitucional, por lo que propuso

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

modificar el primer resolutivo para aclarar que no se trata de un incumplimiento de las partes sino de un órgano distinto. Por ende, consideró que se está ante una cuestión de aplicación de normas declaradas inválidas.

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que el expediente está identificado como una denuncia de incumplimiento por aplicación de normas o actos declarados inválidos en la sentencia de una controversia constitucional y no como un incidente en incumplimiento.

El señor Ministro Pardo Rebolledo propuso agregar un punto resolutivo en el que se precisen los efectos del fallo protector.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que se haría cargo de las observaciones de los señores Ministros en el engrose.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que el efecto que se propone del incumplimiento consiste en que se reponga el procedimiento en un juicio que está concluido.

A propuesta del señor Ministro Franco González Salas el secretario general de acuerdos dio lectura al primer punto resolutivo el que quedaría en los términos siguientes: “PRIMERO. Es procedente y fundada la denuncia de aplicación de normas declaradas inválidas en la controversia constitucional 12/2001”.

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que se está ante las secuelas de la decisión de este Alto Tribunal en denuncia de la aplicación de normas declaradas inválidas en una controversia constitucional por lo que deben precisarse sus efectos.

Indicó que se está en presencia de una situación inédita, por lo que es necesario delimitar los efectos del fallo e instruyó al secretario general de acuerdos para que tome en cuenta las consideraciones respecto de los efectos para incluirlos en los puntos resolutivos que se someterán a consideración del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Pérez Dayán propuso que los efectos se aborden en un considerando aparte para delimitar sus alcances.

El señor Ministro Presidente Silva Meza recordó que conforme a lo previsto por este Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el treinta de abril de dos mil trece, con independencia del resultado de las votaciones, la totalidad de los señores Ministros deberán manifestar su voto en relación con los efectos del fallo.

A las doce horas con cincuenta y cinco minutos el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con quince minutos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea propuso continuar con la discusión de los efectos del fallo en la

*Sesión Pública Núm. 77    Martes 6 de agosto de 2013*

siguiente sesión estar tener posibilidad de reflexionar respecto de los argumentos vertidos.

En atención a la referida propuesta, el señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que la discusión de los efectos del fallo continuará la siguiente sesión, convocó a los señores Ministros a la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves ocho de agosto del presente año, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las trece horas con veinte minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.